

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420

REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

14ª REUNIÓN — 9ª SESIÓN ORDINARIA
17 DE MAYO DE 1995

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDUARDO MENEM**
y del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don **ORALDO N. BRITOS**

Secretarios: doctor **EDGARDO RENÉ PIUZZI** y señor **EDGARDO P. V. MURGUÍA**

Prosecretarios: señor **JUAN JOSÉ CANALS** y doctor **DONALDO ANTONIO DIB**

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
BITTEL, Deolindo F.
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo N.
CAFIERO, Antonio F.
CENDOYA, Jorge J.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
LAFFERRIÈRE, Ricardo F.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ, Daniel E.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MOLINA, Pedro E.
OYARZÚN, Juan C.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.

RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO, Juan C.
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SNOPEK, Guillermo E.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
STORANI, Conrado H.
VACA, Eduardo P.

AUSENTES, CON AVISO:

AVELÍN, Alfredo
CABANA, Fernando V.
COSTANZO, Remo J.
HUMADA, Julio C.
JUÁREZ, Carlos A.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MIRANDA, Julio
SÁNCHEZ, Libardo N.
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.

POR ENFERMEDAD:

OTERO, Edison

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 1382.)

2. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador por Santa Cruz don Felipe Ernesto Ludueña procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Página 1382.)

3. Homenajes:

I. A la memoria del escritor cubano José Martí. (Pág. 1382.)

II. A la memoria del comandante de la Gendarmería Nacional don Raúl R. Aguirre. A continuación se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de declaración (S.-387/95). (Pág. 1385.)

4. Asuntos entrados:

I. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 1386.)

II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Alejandro Próspero Sánchez como juez federal de Primera Instancia de Córdoba (P.E.-94/95). (Pág. 1386.)

III. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor José María Tribuzzio como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba (P.E.-103/95). (Pág. 1387.)

IV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Domingo Alfredo Mercante como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal (P.E.-106/95). (Pág. 1387.)

V. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita la devolución del mensaje por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Jorge María Ponferrada como juez federal de Primera Instancia de Catamarca (P.E.-107/95). (Pág. 1387.)

VI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Hugo Jerónimo Martín Valerga como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal (P.E.-162/95). (Pág. 1387.)

VII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Osvaldo Enrique Lorenzo como juez federal de Primera Instancia de Campana, Buenos Aires (P.E.-186/95). (Pág. 1387.)

VIII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación

del doctor Raúl Alberto Rodríguez como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis (P.E.-189/95). (Pág. 1387.)

IX. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación de la doctora María Emilia Postolovska como jueza nacional de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal (P.E.-198/95). (Pág. 1388.)

X. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor José María Pérez Villalobo como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba (P.E.-199/95). (Pág. 1388.)

XI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Luis Alberto Dupou como juez nacional de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal (P.E.-200/95). (Pág. 1388.)

XII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Enrique Ulises García Vitor como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Entre Ríos (P.E.-201/95). (Pág. 1388.)

XIII. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifican los códigos Penal y Aduanero en lo referente al control de las exportaciones sensitivas y de material bélico (P.E.-86/95). (Página 1388.)

XIV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueban los convenios suscriptos en Cartagena de Indias, Colombia (P.E.-95/95). (Página 1389.)

XV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se veta parcialmente el proyecto de ley registrado bajo el número 24.485 (reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (P.E.-101/95). (Pág. 1394.)

XVI. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se veta parcialmente el proyecto de ley registrado bajo el número 24.481, de patentes. (P.E.-102/95). (Pág. 1395.)

XVII. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se reglamenta un artículo de la Constitución Nacional (Acción de amparo). (P.E.-104/95). (Página 1397.)

XVIII. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones provenientes de Estados no

cita el apoyo a la iniciativa tendiente a un acuerdo de cooperación entre la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (S.-378/95). (Pág. 1512.)

CLVII. Proyecto de declaración del señor senador Ludueña por el que se declara de interés para el Honorable Senado el VI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (Colacmar), a celebrarse en Mar del Plata del 23 al 27 de octubre (S.-379/95). (Pág. 1513.)

CLVIII. Proyecto de comunicación del señor senador Sapag por el que se solicita la inclusión de la ciudad de Zapala, Neuquén, entre las beneficiarias de la disminución de tarifas de combustibles para la zona patagónica (S.-380/95). (Pág. 1514.)

CLIX. Proyecto de resolución del señor senador Solana por el que se adhiere a la celebración del Día Mundial de la Población (S.-381/95). (Pág. 1515.)

CLX. Proyecto de declaración del señor senador Ludueña por el que se declara de interés para el Honorable Senado el "Taller Nacional de Prosopis" a realizarse del 4 al 6 de julio de 1995 en Santiago del Estero (S.-382/95). (Pág. 1515.)

CLXI. Proyecto de resolución del mismo señor senador por el que se establece la plantación de especies arbóreas autóctonas en las veredas sitas en el predio del Senado de la Nación delimitado por las calles Entre Ríos, Alsina, Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen de la Capital Federal (S.-383/95). (Pág. 1516.)

5. Lectura y aprobación del plan de labor para la sesión de la fecha. (Pág. 1517.)

6. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para ascender al grado inmediato superior al general de división (RE) Héctor Solanas Pacheco (P.E.-4/95). Se aprueba. (Pág. 1517.)

7. Consideración sobre tablas del mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se observan diversos artículos de la ley 24.481, de patentes de invención y modelos de utilidad (P.E.-102/95). Se confirma parcialmente. (Pág. 1519.)

8. Manifestaciones con respecto a la consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración del señor senador Alasino por el que se expresa beneplácito ante el otorgamiento del premio "Miguel de Cervantes" al escritor peruano Mario Vargas Llosa. (S.-1.453/94). Se levanta la sesión por falta de quórum. (Pág. 1531.)

9. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 1532.)

II. Inserción. (Pág. 1533.)

—En Buenos Aires, a las 16 y 56 del miércoles 17 de mayo de 1995:

I

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Para una manifestación en minoría tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Señor presidente, señores senadores: como hay quórum en la casa creo que podemos invitar a los integrantes de este cuerpo a que concurren al recinto para poder dar comienzo a la sesión.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia informa que se están realizando las gestiones para que los señores senadores bajen al recinto a ocupar sus bancas.

—Se continúa llamando.

—A las 17 y 1:

Sr. Presidente (Menem). — La sesión está abierta.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito al señor senador por Santa Cruz don Felipe Ernesto Ludueña a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Ludueña procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos)

3

HOMENAJES

I

Sr. Presidente (Menem). — En función de lo acordado por los señores presidentes de bloque en la reunión de ayer, se procederá a rendir homenaje, en primer lugar, al escritor cubano José Martí.

Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente, señores senadores: al recordar a José Martí en el centenario de su muerte, entiendo que el mejor homenaje a un hombre cuya vida y obra estuvieron voluntariamente alejadas de toda vanidad y retórica es aquél que está también despojado de alabanzas.

No lo estamos recordando; lo estamos presenciando, porque es totalmente vigente.

7

LEY DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD

Sr. Presidente (Menem). — De acuerdo con el plan de labor aprobado corresponde considerar el expediente P.E. — 102/95 sobre patentes y modelos de invención.

Tal como lo prevé la Constitución, el Parlamento tiene que expedirse acerca de si acepta las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la ley sancionada sobre esta materia o no.

Fue solicitado el tratamiento sobre tablas de este asunto. Antes de cualquier consideración, corresponde someterlo a votación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se deja constancia de que fue aprobado por unanimidad.

Por Secretaría se dará lectura.

— Se lee el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo que figura en el punto XVI de los asuntos entrados.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Sr. Molina. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Señor presidente, señores senadores: junto con los señores senadores Romero y Martínez Almudevar fuimos autores del proyecto de ley sobre patentes, que fuera corregido por algunas otras iniciativas como la de los señores senadores Alasino y Genoud, con quienes trabajamos y estudiamos este tema durante varios años.

Pero ante la devolución de este proyecto efectuada por el Poder Ejecutivo, le encargamos a otro grupo de juristas de nuestro bloque el estudio en profundidad de esta norma, y creo que existen algunas cuestiones a las que no vamos a renunciar, como ser la facultad que tenemos, como senadores, de fijar ideas, principios y propuestas más allá de todo tipo de presiones.

Cuando juntamente con el señor senador Romero presentamos originalmente nuestra propuesta, fijamos un plazo de cuatro o cinco años para la reconversión. Pero luego nuestro bloque realizó un estudio en profundidad y advirtió la necesidad de establecer un plazo mayor para dicha reconversión. Coincidimos, entonces,

todos los integrantes de este Senado en fijar un plazo de ocho años, atendiendo al Mercosur y pensando en una Latinoamérica que comience a investigar, cuidando la producción, la empresa local, y también las fuentes de trabajo. Consideramos que un plazo de ocho años no constituye una propuesta tan disparatada, sobre todo teniendo en cuenta que para las grandes multinacionales ya ha vencido su competencia local y están trabajando en el mundo con todo tipo de presiones. Nos parece justo y necesario establecer un plazo que permita que la Argentina deje de ser un país exclusivamente agroexportador y pueda investigar a fin de obtener —y de hecho ya lo hemos logrado en más de una oportunidad— una molécula que permita curar una enfermedad.

Hemos decidido morigerar nuestra pretensión inicial de otorgar patente únicamente a la producción local. Y también hemos decidido que el señor senador Alasino lleve la voz del justicialismo en esta cuestión, porque si bien no es autor del proyecto, ha sido quien ha encontrado, junto con los juristas de nuestro bloque, las correcciones que el Poder Ejecutivo nos está reclamado.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: como consideración previa debo decir que este tema fue motivo de estudio en este Senado durante un año aproximadamente, habiendo sido girado a cinco comisiones que, pacientemente, durante ese lapso y una vez a la semana, recibieron las opiniones de todos los interesados en su análisis.

Como conclusión arribamos a una norma que fue aprobada en general por unanimidad en este Senado. Este antecedente nos obliga a ser doblemente minuciosos en el análisis que al efecto ha realizado el Poder Ejecutivo. Y debo decir que no tenemos absolutamente ninguna duda, señor presidente, de que tanto a este Congreso como al Poder Ejecutivo los animan las mejores intenciones y la defensa absoluta e irrestricta de los intereses nacionales.

Es bueno también reafirmar, señor presidente, que el Poder Ejecutivo ha hecho mínimas observaciones sobre las ciento nueve normas que contiene este proyecto de ley, contabilizando nueve artículos que han sido observados en forma total y siete lo que han sido parcialmente. Y esta concordancia de ambos poderes sobre la mayoría de las normas nos ha hecho duplicar nuestros esfuerzos a fin de lograr armonizar aquellos puntos en los cuales aparecíamos

manteniendo una opinión distinta a la sustentada por el Poder Ejecutivo.

El resultado de este esfuerzo ha derivado en la decisión de este bloque de insistir en su proyecto. O dicho de otra manera admitir parcialmente algunas de las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.

Voy a empezar, señor presidente, por afirmar cuáles son los artículos en los que este bloque va a insistir, con la pretensión de que sea el Senado el que lo haga. Planteamos nuestra insistencia sobre los siguientes artículos: 36 inciso c); 44; 46 (primera parte del último párrafo); 50; 47, 104, 105, 91, 94 y 97.

Simplemente a efectos metodológicos y antes de argumentar brevemente el motivo de esta decisión, voy a decir en qué artículos nuestro bloque no va a insistir, por lo cual va a admitir las observaciones del Poder Ejecutivo. No insistimos en los siguientes artículos: 7º, inciso c); 37; 42; 43; 65, incisos d), f), g) y h), y 102.

Insistimos en el artículo 36, inciso c), que, en realidad, se refiere a un tema conocido en doctrina como agotamiento de los derechos, que ha sido expresamente excluido del acuerdo GATT. En efecto, el artículo 28 del GATT, al que hace referencia el veto, contiene una llamada que lo remite al artículo 6º de dicho acuerdo. Según este artículo, referido a la extinción, los derechos de propiedad intelectual no pueden ser sometidos a controversias en el marco del GATT y las legislaciones nacionales conservan plena autonomía para acordar lo que estimen conveniente para sus intereses.

En mérito a ello este Congreso —o este bloque—, en uso de sus facultades constitucionales de brindar una legislación que considere conveniente al pueblo argentino, ha establecido que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra cualquier persona que adquiera o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país.

Entendemos, señor presidente, que el término "lícitamente" deberá interpretarse en el sentido de que podrá importarse el producto de cualquier país siempre y cuando éste proteja la propiedad intelectual. Una interpretación distinta llevaría a una autocontradicción del texto de la ley, lo que no es razonable, ya que por un lado protegería los derechos del inventor en el ámbito interno, y por el otro, los desconocería si se permitiera la importación desde países en los

que no se reconoce la protección de las patentes de invención.

Vamos a insistir en el artículo 44. Creemos que la mencionada norma debe mantenerse conforme al proyecto de ley sancionado, ya que no se nos escapa la necesidad de que haya una autoridad que decida cuándo se deben establecer excepciones a los derechos conferidos por una patente toda vez que hay derechos que, axiológicamente, tal vez, tienen una mayor entidad que el derecho del titular de la patente. En efecto, el artículo 44 sancionado por este cuerpo ha previsto que se podrán establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente cuando existan causas que tengan que ver con la protección de la salud y la nutrición de la población, y con la posibilidad del Estado de implementar políticas para promover el interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

Creemos que estos valores que intenta preservar la ley son sustancialmente superiores al derecho individual de propiedad intelectual. Esta posibilidad que brinda la ley y la autoridad administrativa de establecer excepciones a los derechos conferidos se da en un todo de acuerdo con lo establecido por el GATT en los artículos 30 y 8º. Tanto es así que casi están transcritos literalmente en nuestra norma, por lo cual rechazamos enfáticamente el argumento de que este artículo atenta contra la seguridad jurídica.

El Estado, a través de los funcionarios públicos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, por sí o a pedido de la autoridad judicial o del defensor del pueblo —institución que hemos incorporado a la Constitución—, determinará cuándo se configuran dichas causales. Esto no es atentar contra las reformas económicas ni otorgar gran discrecionalidad, sino ocupar el lugar que el Estado debe tener cuando se afectan derechos de la población relacionados con la salud, la nutrición y el desarrollo socioeconómico y tecnológico.

Vamos a insistir también en el artículo 46 —primera parte del último párrafo— y en el artículo 50. Ambos pueden ser tratados en conjunto porque tienen la misma frase vetada. El mismo criterio que ha animado al veto es el que este cuerpo sostiene para su rechazo, por lo cual insistiremos en la redacción original. Consideramos que dichos artículos no contradicen al GATT. Los dos tienen una pauta para fijar el monto de las regalías. Este es un criterio, pero sólo eso, a ser tenido en cuenta. No significa que el monto definitivo de la regalía esté circuns-

cripto necesariamente a él. Además, tampoco es indispensable que el monto de la regalía sea fijado estableciendo la división entre los montos máximos y mínimos de un determinado sector ni que se llegue a un porcentaje uniforme para tal fin.

Por otra parte, en este caso específico la ley establece la revisión judicial, por lo que admite, acepta, reconoce y corrobora el control que establece en este aspecto el GATT.

Vamos a insistir también en el artículo 47, segundo párrafo. El veto argumenta que este artículo es incongruente con lo dispuesto por la ley 22.262, de defensa de la competencia, y que esta materia debe regirse por la ley específica y no por lo determinado por la sección octava del GATT.

En primer lugar, señor presidente, consideramos que sin perjuicio de que se aplique la ley de defensa de la competencia cuando corresponda, la norma que estamos considerando es más específica aún. ¿Por qué? Porque esta ley regula las patentes de invención, o sea, el monopolio que el Estado brinda por un tiempo determinado al inventor de un producto o de un procedimiento para fabricarlo o explotarlo. Por lo tanto, no es incongruente que ante la magnitud del derecho que otorga no se contemplen en nuestra opinión casos especiales de prácticas anticompetitivas, sin perjuicio obviamente de lo que establece la ley 22.262.

El acuerdo del GATT hace mención en varios artículos a la facultad de los estados miembros de prevenir las prácticas anticompetitivas a que puede dar lugar el abuso de los derechos de propiedad intelectual. Aquí me voy a permitir leer la parte primera, referida a disposiciones generales y principios básicos, donde en el inciso 2 del artículo 8º el GATT dice: "Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología".

A su vez, el artículo 31 titulado "Otros usos sin autorización del titular de los derechos", establece que cuando se conceden licencias obligatorias para poner fin a prácticas anticompetitivas no será necesario el procedimiento voluntario anterior y que al concederse la licencia ésta no será autorizada para abastecer principalmente al mercado interno.

Además establece que la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas podrá te-

nerse en cuenta al establecer el importe de la regalía y que las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan.

Específicamente en el inciso 2 del artículo 40, correspondiente a la sección 8, que el GATT titula "Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales", se establece: "Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación nacional las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente".

Por lo tanto, estamos totalmente persuadidos de que no contraría las disposiciones del GATT el hecho de que el Poder Legislativo establezca en esta ley prácticas que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tengan un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente, sin perjuicio —obviamente— de que se aplique administrativamente la ley 22.262, si se diera el caso.

Vamos a insistir también, señor presidente, en los artículos 104 y 105 del proyecto sancionado. Los períodos de aplazamiento contenidos en el artículo 65 del GATT deben hacerse valer, en nuestra opinión, cuando el país correspondiente dicte la legislación respectiva. Para la Argentina, ésta es la oportunidad, ya que en este momento se está sancionando una ley que amplía la protección mediante patentes de productos de sectores de tecnología que no gozaban de esa protección.

Por otra parte, el Acuerdo GATT no podía ratificarse con reserva. La elección del plazo a partir del cual se iba a aplicar la legislación a los sectores de tecnología que antes no estaban protegidos se debía hacer en el momento de sancionarse la legislación respectiva. A esto apunta el proyecto que originalmente aprobó este Senado.

Con respecto al artículo 105 del proyecto de ley sancionado, su primero y segundo párrafos son una consecuencia del texto del artículo 104, por lo que el Senado pretende insistir en la sanción de dicho artículo.

El tercer párrafo, señor presidente, contempla el caso de que sea concedida una patente y en ese momento haya terceros que estén haciendo uso de ella. El artículo reconoce que el titular de la patente tendrá derecho a percibir una

retribución justa y razonable de dichos terceros desde la concesión de la patente hasta su vencimiento.

El Poder Ejecutivo, al vetar este artículo, consideró que no guardaba relación con las normas establecidas por el artículo 70 del Acuerdo. Sin embargo, el inciso 4 del artículo 70 establece: "En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida, y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado o para los que se haya hecho una inversión significativa antes de la fecha de aceptación del Acuerdo... cualquier miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos... Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa", cosa que establece la norma aprobada por este cuerpo. Por eso este Senado insiste en el artículo 105.

Debo decir también que frente a este tema hay un antecedente importante. Cuando nuestro país ratificó el Convenio de la UPOV (Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales) en 1994, existían dos actas de dicho Convenio: una de 1978 y otra de 1991. La de 1978 estaba dirigida a los países en vías de desarrollo —así decía el acta—, y la de 1991, a los países desarrollados. Nuestro país, señor presidente, ratificó el acta de 1978.

También vamos a insistir en el artículo 91.

Este artículo está referido a la carga de la prueba. El principio procesal de que quien alega un hecho debe probarlo, en este artículo —y por las razones que vamos a expresar— se ha mutado. Sin embargo, este artículo que altera —como decía— los principios procesales cuando se trate de un procedimiento civil en el que se disputa la titularidad de una patente de procedimiento para obtener un producto nuevo en los términos del artículo 4º de la ley de patentes, entrará en vigencia a partir del 1º de enero del año 2000. A partir de esa fecha el juez podrá ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento empleado para obtener idéntico producto es diferente del procedimiento patentado.

La inversión de la carga de la prueba, señor presidente, se da en situaciones bastante difíciles, en las cuales le es mucho más difícil, o imposible, comprobar a quien alega el hecho, que es la norma habitual, y por la situación de excepción quien es acusado de ese hecho debe probar la existencia de su derecho. El plazo que esta-

blece el proyecto de ley para que entre en vigencia está de acuerdo con el artículo 65 del GATT.

La ley 24.425, que ratifica el GATT, fue publicada en el Boletín Oficial del 5 de enero de 1995. El artículo 65 al que hice referencia, dice: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 *infra*, los Miembros no estarán obligados a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC", la Organización Mundial de Comercio, que reemplaza al GATT.

En el punto 2 continúa diciendo: "Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1 *supra*, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3º, 4º y 5º de su Parte I".

La lectura de este artículo nos releva de mayores comentarios y da razón suficiente para la insistencia que este bloque pretende del artículo 91.

El cuerpo va a insistir en la relación del artículo 94 que establece, señor presidente, que el Poder Ejecutivo designa y remueve los directores del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Es decir que recae sobre él la facultad de nombramiento de los directores de INPI, pero con acuerdo de una comisión bicameral.

En el veto se esgrime el artículo 99, inciso 7) de la nueva Constitución, cuando en realidad, señor presidente, es idéntico al artículo 86, inciso 10), del texto histórico. Según el veto, da la impresión de que la Constitución ha innovado en este tema y no lo ha hecho en lo absoluto porque repite el mismo texto.

Este criterio de la necesidad de acuerdo de una comisión bicameral para la designación de ciertos funcionarios ya ha sido establecido y admitido con anterioridad en las leyes que rigen las designaciones de los miembros de los entes reguladores.

Además, nunca ha sido cuestionada la facultad de designación del Ejecutivo, por más que una ley que disponga que por una cuestión de control algunas de sus designaciones deban contar con el acuerdo previo de este cuerpo.

La ley que se cita, de 1974, tiene otras razones históricas y desde la instauración de la democracia hasta aquí la tónica ha sido distinta respecto de la ley que se esgrime como antecedente para vetar la norma a que me estoy refiriendo.

Finalmente, el Senado también insistirá en la redacción del artículo 97. La creación de la Administración Nacional de Patentes no implica una mayor erogación del Estado, ya que dicha Administración se solventará mediante la reasignación de los recursos ya establecidos en el presupuesto.

Este es un tema muy importante para el crecimiento de la economía y la atracción de mayores inversiones. Por lo tanto, en nuestra opinión, la administración pública deberá redistribuir los recursos de otras áreas que no son tan beneficiosas para el país. El mayor beneficio que brindará al país tiene relación con los costos que demandará su implementación.

Brevemente, señor presidente, diré por qué este bloque ha creído que tiene mayor razón, respecto de los artículos siguientes, las observaciones que a la norma le hace el Poder Ejecutivo.

Considérese el artículo 7º, inciso c). Es cierto que se ha deslizado allí un error material, razón por la cual el Senado debe aceptar el veto ya que no puede corregir la norma. Pero quiero hacer una breve consideración respecto de cómo quedará este aspecto ante la ausencia de esta norma, y de la propuesta que en el futuro podemos hacer. Las plantas y los animales sólo serán patentables si hubieran sido modificados genéticamente. De no haber sido modificados genéticamente, correspondería la prohibición del inciso anterior de este mismo artículo —el inciso b).

Esta solución, señor presidente, coincide con el proyecto original del Poder Ejecutivo y también es la solución propiciada por los países europeos y del Grupo Andino.

Por otra parte, a pesar de que el veto se hace extensivo a todo el inciso, creemos que las variedades de plantas seguirán estando protegidas por los derechos del obtentor regulados por la ley 20.247, y no serían patentables ya que el Acta de 1978 —el convenio UPOV al que ya hice referencia—, a la que adhirió la Argentina en 1994, no permite la acumulación de la protección por patentes y derechos de obtentor. Esto corresponde al artículo 2º del convenio. Serían patentables las razas de animales, en teoría. Con respecto a la patentabilidad o no de los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de plantas y animales, creemos que ello entra en la prohibición del inciso anterior, el b); por último, serían patentables los microorganismos.

En todo caso, creo que es tarea de este Congreso estudiar la conveniencia de permitir en el

futuro la patentabilidad o no de las razas animales y de las plantas, y de los animales modificados genéticamente.

También el Senado admitirá la observación al artículo 37, porque creemos que la norma en cuestión es casi inaplicable en la materia de que se ocupa la presente ley, resultando, en nuestra opinión, casi inocua o inofensiva la incorporación al texto legal.

Sin embargo, frente a los fundamentos del veto, es necesario destacar que la contradicción apuntada por el artículo 70, inciso 4) del acuerdo GATT es inexistente, pues ella está referida a los derechos del autor y no a las patentes en general.

Finalmente, desde nuestro punto de vista, la inocuidad de esta norma se pone aún más de manifiesto al no incorporar el texto legal el instituto del *pipe line* o sea de la retroactividad de derechos. En nuestra opinión, entonces, la objeción del Poder Ejecutivo tiene razón suficiente y vamos a admitir la observación.

Tampoco vamos a insistir —y, en consecuencia, admitiremos la observación formulada— respecto de los artículos 42 y 43. Y los trataremos conjuntamente porque el artículo 43 es una consecuencia del artículo 42.

En este sentido vamos a aceptar los términos del veto, ya que una revisión prolija del tema nos ha convencido de que estos artículos son incompatibles con los términos del inciso 1 del artículo 27 del Acuerdo. Aunque no es una opinión “pacífica” entre los legisladores de este cuerpo, creemos que es terminante este inciso 1 cuando dice: “... las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país”.

Por esta razón, y dada la necesidad de respetar los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, pretendemos que este cuerpo no insista en los términos de los artículos 42 y 43 del proyecto mencionado.

Por las razones que paso a explicar, tampoco vamos a insistir en los incisos d), f), g) y h) del artículo 65. Tal vez el tratamiento de estos incisos debió hacerse por separado, pero como el veto los incorpora a todos en una sola norma, sería desprolijo y tal vez imposible desde el punto de vista técnico que nosotros insistiéramos en uno y admitiéramos el veto en otro. Esto es para dejar limpia y prolija la ley. Así, se ha tomado la decisión de admitir el veto en los cuatro incisos.

Baste con decir que el inciso *d*) del artículo 65 se refiere a los usos concedidos sin autorización del titular de la patente en caso de haber incurrido en prácticas no competitivas, según el artículo 47, o cuando el Poder Ejecutivo dispusiera una licencia compulsiva por emergencia sanitaria o seguridad nacional, según lo expresado en el artículo 48. Para estos casos, el proyecto sancionado prevé que si en un año desde que se concedió el uso no se satisfacen los objetivos para los que fue concedida, caduca la licencia.

Con respecto al inciso *f*) del artículo 65, cabe señalar que transcurrido determinado plazo sin que el titular de la patente la explote en los términos establecidos por el artículo 46, cualquier persona puede pedir autorización para usar la invención sin autorización del titular. En aquel artículo se establece que si dentro de los ciento ochenta días corridos de vencidos los plazos previstos en el artículo 46 no se presentare solicitud de uso, caducaría esta posibilidad.

Sin embargo, el inciso 3º del artículo 5º del Convenio de París —al cual también hace referencia el veto— establece que ninguna acción de caducidad o de revocación de la patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria. Ante la calidad de la norma y dados los términos del Convenio de París, ratificado por nuestro país a través de la ley 22.195, vamos a aceptar los términos del veto u observación del Poder Ejecutivo.

El inciso *h*) del mencionado artículo 65 se refiere a la caducidad de pleno derecho de una patente cuando no es explotada por su titular o no fue solicitado su uso conforme al artículo 46. Sin embargo, según el inciso 2º del mencionado artículo 5º del Convenio: "Cada uno de los países de la unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación".

La primera parte del inciso 3º del referido artículo 5º establece que la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiese bastado para prevenir estos abusos.

Teniendo en cuenta el articulado del Convenio de París que citamos, creemos que al Poder Ejecutivo le asisten razones para su veto, por lo que no insistiremos en este inciso.

Con relación al inciso *g*) del artículo 65 —respecto del que también aceptaremos los términos

del veto—, es necesario destacar que el artículo 7º, inciso *a*), establece la no patentabilidad de las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente. Si una vez concedida la patente se dan estos supuestos, las autoridades competentes podrán tomar, deberán tomar las medidas necesarias si se comete delito o se violan disposiciones legales que protegen el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o que preserven los vegetales o eviten daños graves al medio ambiente. En virtud de ello no vamos a insistir en este texto, y vamos a aceptar los términos y las razones del veto de este artículo en los incisos que he mencionado.

Finalmente, señor presidente, pensamos que también le asiste razón al Poder Ejecutivo cuando veta el artículo 102, porque es cierto que es un principio general del derecho que las leyes rigen para el futuro. Así lo dispone el artículo 3º del Código Civil cuando establece que las leyes rigen para el futuro, no tienen efecto retroactivo ni pueden alterar los derechos ya adquiridos. A su vez, el artículo 2º del mismo Código señala que las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que ellas determinan. Si no designan tiempo, la ley publicada en la Capital de la República es obligatoria desde el día siguiente al de su publicación.

Por tal motivo, admitimos las razones del veto de este artículo y dejamos a la norma general del Código Civil establecida en los artículos 2º y 3º el principio de la vigencia de la presente.

Por estas razones, señor presidente, este bloque ha resuelto la insistencia parcial, tal como he expresado, y va a solicitar a los demás bloques que lo acompañen, a los efectos de sostener las razones que animaron al Senado en el momento de estudiar y sancionar esta ley.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: no es la primera vez que decimos que la Ley de Patentes Industriales y de Modelos de Invención es una de las que más tiempo, más trabajo y más esfuerzo ha insumido y que ha brindado un resultado tan positivo como fue la concertación entre todos los sectores políticos que integran tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados, para llegar finalmente a una votación prácticamente unánime en ambas Cámaras.

Nuestro bloque comparte en general el criterio manifestado por el miembro informante de la mayoría, el señor senador por Entre Ríos, pero haremos algunas breves consideraciones, pues entendemos que estamos frente a una de las leyes que mayores expectativas ha generado tanto en el ámbito de la legislación interna de nuestro país como también en el exterior.

— Murmullos en el recinto.

Sr. Genoud. — Señor presidente: solicito que me haga respetar en el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Les ruego a los señores auxiliares de los señores senadores que se sirvan respetar al orador en el uso de la palabra. Si tienen que conversar háganlo fuera del recinto, porque realmente tiene razón el señor senador: lo están interrumpiendo en su exposición.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Decía, señor presidente, que estamos frente a una de las leyes con mayor repercusión económica de las muchas que ha sancionado este Congreso, y que tiene sin lugar a dudas un fuerte impacto en la política internacional debido a que hay muchos países del mundo que están observando la experiencia argentina para receptar algunas de las ideas que hemos plasmado en ella e incorporarlas en sus respectivas legislaciones.

Además, señor presidente, estamos frente a un veto del Poder Ejecutivo, el que haciendo uso de una facultad constitucional devolvió a la Cámara de origen — el Senado de la Nación — esta ley de tanta importancia. En este caso, nosotros estamos cumplimentando el mecanismo que establece el artículo 83 de nuestra Constitución, que es el de confirmar — según lo dice la palabra explícita de nuestra Carta Magna — la sanción que oportunamente dimos ambas Cámaras del Congreso.

Decía inicialmente que pocas leyes habían motivado un estudio tan profundo y serio. Bien recordaba el señor senador por Entre Ríos de la bancada Justicialista que desde que el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de ley de patentes al Senado, las cinco comisiones que entendieron en el tema pusieron en marcha un complejo mecanismo de audiencias públicas que permitió que prácticamente todos los sectores interesados en este tema pudieran hacer escuchar sus opiniones.

Así, por ejemplo, lo hicieron la Cámara de Productores de Medicamentos Nacionales,

como CILFA, y la que agrupa a los laboratorios internacionales o multinacionales, como CAEME. También lo hicieron otras entidades, como Cediquifa; intervinieron los colegios farmacéuticos, bioquímicos y médicos, además de la Universidad de Buenos Aires y de la Federación de Inventores. En definitiva, un amplio arco o espectro de diversas opiniones que trajeron sus reparos respecto de la legislación que estábamos por sancionar.

Además, señor presidente, se escuchó al Poder Ejecutivo en las voces de los ministros de Economía, doctor Cavallo, y de Salud, doctor Maza. Ellos también hicieron escuchar pormenorizadamente sus opiniones en todos y cada uno de los artículos que componen esta ley.

Rescato además, señor presidente, el esfuerzo que se hizo para concertar un texto común que interpretara a todos los sectores políticos que integran ambas Cámaras.

Creo que fueron solamente cinco diputados los que votaron en contra de esta ley. Salvo esa excepción, el resto de los legisladores, los que en su mayoría, apoyaron lo que considero un esfuerzo de carácter inédito en los últimos años de nuestra vida parlamentaria para aprobar esta Ley de Patentes que lleva el número 24.481.

Luego sobrevino el veto del Poder Ejecutivo, que la bancada de la Unión Cívica Radical enjuició a través de declaraciones públicas y, en alguna oportunidad, en el propio recinto. Además, luego se dictó el decreto 621 de 1995, a través del cual el Poder Ejecutivo reglamentó el acuerdo multilateral del GATT — a nuestro juicio en una actitud reñida con la propia letra de la Constitución Nacional —; toda vez que estaba usurpando facultades que son privativas del Congreso de la Nación, pues los tratados internacionales tienen que ser ineludiblemente reglamentados por ley.

¿Por qué, entonces, la necesidad y el apuro de confirmar o insistir en la ley de medicamentos? Porque una vez ratificada esta ley con los dos tercios de ambas Cámaras obviamente caería por su propio peso la vigencia del decreto 621 mediante el cual se reglamentó el acuerdo multilateral del GATT.

No voy a sobreabundar en todos los argumentos que se han dado para defender los artículos cuya insistencia anunció el señor senador por Entre Ríos. Fueron muy largos los debates que se llevaron a cabo para explicar no solamente la concepción general de la ley de patentes, sino también el porqué de cada uno de los artículos, que en la votación en particular tu-

vimos oportunidad de exponer e incluso polemizar.

Recuerdo a los señores senadores que cuando se trató en particular esta ley, el bloque de la Unión Cívica Radical, por mi intermedio, observó la redacción de muchos de sus artículos, en algunos de los cuales existió coincidencia con el veto presidencial, como el caso del artículo 65, inciso h).

Nosotros sostuvimos que era errónea la redacción que le daba el dictamen de mayoría, ya que se estaba vulnerando el acuerdo internacional de París de propiedad intelectual. Por lo tanto, no incorporamos esa norma en nuestro dictamen de minoría. De modo tal que en ese sentido hasta habría una coincidencia con el veto que practicó, a través del decreto 548, el presidente de la Nación.

Estamos absolutamente de acuerdo, señor presidente, en que se confirmen los artículos que hacen a la estructura central de la ley de patentes, como es, por ejemplo, la creación del INPI. Este artículo fue vetado porque se sostenía que creaba un ente burocrático, sin advertir que lo que se estaba haciendo era sustituir el actual Registro de Propiedad Intelectual por un Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Y, por otra parte, nunca podría existir el funcionamiento de un sistema de patentes sin una autoridad de aplicación que necesariamente tiene que ser este registro de patentes que nosotros hemos denominado INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Y con ello, todas las facultades que conlleva ser la autoridad de aplicación en la legislación de patentes, como es, por ejemplo, otorgar las licencias obligatorias cuando correspondiese. O bien, cuando existiesen emergencias sanitarias o planteos de seguridad nacional graves, la autoridad de aplicación puede determinar que se produce la circunstancia que habilita la licencia obligatoria a terceros para fabricar ciertos y determinados productos farmoquímicos.

Además, defendemos a rajatabla el sistema de *royalties* que habría quedado sin efecto por imperio del decreto 621, por el cual se reglamentó el GATT. Nos parece absurdo que un país como la Argentina, que está haciendo grandes esfuerzos para poner en marcha su aparato productivo, deje sin efecto un sistema de licencia semiautomática mediante el pago de un *royalty* o remuneración adecuada, según los términos del GATT.

De tal modo que, con esta confirmación de los artículos mencionados por el senador por Entre

Ríos, no hacemos otra cosa que recibir el nudo gordiano del acuerdo multilateral GATT en lo que se refiere al otorgamiento de licencias semiautomáticas cuando se den las condiciones y se cumplan determinados requisitos.

No podemos dejar de adherir fervorosamente a la decisión del bloque justicialista de insistir en la sanción de los artículos 104 y 105, que establecen un plazo de transición de ocho años para la entrada en vigencia de la ley, mientras que el Tratado del GATT habilitaba a países en vía de desarrollo, como la Argentina, a gozar de hasta diez años de transición. Otros países de bajos recursos, según lo califica el GATT, como Burundi o Ruanda —que en algún momento un embajador citó como ejemplos, en forma equivocada—, tienen incluso más de diez años como período de transición.

Los ocho años de transición tienen una razón de ser que nosotros defendemos y ha sido expuesta por el senador por Entre Ríos. Avalamos sus argumentos e incluso los reforzamos. Este período de transición está otorgado en beneficio de las industrias locales que no pueden verse afectadas por un cambio abrupto, instantáneo, de la legislación, que sin duda ocasionaría el incremento de los niveles de receso que algunos sectores de la industria nacional sufren actualmente.

Por otro lado, todos los países del mundo que han modificado su legislación de patentes llevando adelante lo que fue una innovación de carácter legislativo mundial —alineándose con este reconocimiento a los derechos de propiedad intelectual, más concretamente en lo referido a las patentes industriales—, utilizaron distintos períodos de transición, casualmente para que ese cambio no fuera abrupto, sino gradual y paulatino. Es el caso de Italia —con un período de seis años—, España, Portugal e incluso países nórdicos como Finlandia y Noruega, que establecieron un plazo de transición de seis, ocho y hasta diez años.

Creo que para un país como la Argentina —que debe poner en marcha un plan de crecimiento— no gozar de un plazo de transición que le fue otorgado por la comunidad internacional a través de un acuerdo multilateral firmado por más de ciento veinte países significa lisa y llanamente un acto de renunciamiento sin sentido y a cambio de nada.

Y digo a cambio de nada, señor presidente, porque los plazos que fija el GATT no solamente están referidos a los temas vinculados a la propiedad intelectual sino que hay un sinnúmero de

plazos en la muy diversa cantidad de temas que toca el GATT como, por ejemplo, en lo referido a los subsidios agrícolas, la mecánica para las prácticas *antidumping*, los controles fitosanitarios, etcétera.

Si los países desarrollados o industrializados, como los Estados Unidos o de la Unión Europea, se han acogido absolutamente a todos los plazos máximos que se fijaron para la reducción de los subsidios agrícolas —como lo sostuve cuando se trató este tema el año pasado— y están aprovechando, por ejemplo, el plazo máximo de seis años para reducir los subsidios agrícolas en un 36 por ciento, no veo por qué nosotros debemos ser tan generosos en renunciar a los términos que ese tratado multilateral concedió a países como la Argentina.

Nosotros vamos a votar —es la opinión que en la mañana de hoy debatió el bloque de la Unión Cívica Radical— junto a la bancada justicialista. Vamos a votar por la confirmación o la insistencia en los artículos que mencionó el miembro informante del bloque mayoritario y no vamos a insistir en nuestra sanción con relación a los artículos 7º, inciso c), 37, 42, 43, 65 y 102, aceptando el veto.

Pero no podemos dejar de señalar, a modo de observación o reserva de parte del bloque radical, que nosotros hubiésemos preferido insistir también en los artículos 42 y 43. Se trata de dos cláusulas que establecen la obligatoriedad por parte del titular de la patente a producir en el país o en uniones aduaneras o regiones comerciales —en este caso el Mercosur, que integra la Argentina— en donde se registra el invento.

Señalo este tema no por un capricho de carácter intelectual sino porque al momento de discutirse en general el proyecto de ley de patentes sostuvimos que se trataba de una cuestión opinable y discutible porque hay normas contradictorias. En efecto, por un lado, el GATT establece que no puede haber discriminación en cuanto al lugar de producción pero, por otro lado, el tratado de París —que no fue derogado por el GATT y que se refiere a los derechos de propiedad intelectual— fija en una cláusula que pueden establecerse normas que permitan otorgar licencias obligatorias a terceros cuando el titular de la patente no produzca o no explote localmente el producto.

Entonces, ante la colisión de estas normas, entendíamos que lo saludable era acoger la interpretación que beneficiaba al país y luego discutir en el ámbito del organismo mundial del comercio, más concretamente en el órgano de

solución de diferendos, cuál era la interpretación que correspondía a la luz de lo que opinen todos los países signatarios del acuerdo multilateral.

El órgano de solución de diferendos, que tiene un capítulo específico en el GATT, fue creado especialmente en función de las interpretaciones que deben darse a este acuerdo internacional que en materia comercial sin lugar a dudas es el más importante que se ha firmado en la historia de la humanidad. No en vano el acta final tiene 540 fojas y, además, el tratado completo tiene veinte mil fojas, incluidos los anexos de todos los países.

Entonces, este órgano de solución de diferendos es el tribunal de apelación donde deberíamos ir a discutir con aquellos países que se hubieran sentido afectados por la sanción eventual que nosotros hubiéramos dado a este artículo 42. Incluso, si hubiéramos insistido en su sanción, ese organismo podría haber indicado a la Argentina que debía modificar su legislación. En ese caso lo hubiéramos hecho prestamente.

Recuerdo a los señores senadores que ya se ha producido el primer caso de discusión respecto a una interpretación del GATT. La controversia es entre Japón y los Estados Unidos y está relacionada nada menos que con los aranceles de importación para los automotores.

Quiere decir que en Ginebra en este momento está funcionando el órgano de solución de diferendos a fin de interpretar adecuadamente una de las normas del GATT.

Eso es lo que nosotros pretendíamos como mecanismo para dilucidar si es que estábamos legislando de acuerdo a lo establecido por el GATT o no.

Además, señor presidente, hicimos un análisis de la legislación comparada y advertimos que en países como Inglaterra, Francia, Suiza, Bélgica, Dinamarca y Holanda —no enumeraré ni será tedioso con la lectura de los artículos pertinentes— se establece la posibilidad de otorgar licencias obligatorias a terceros cuando el titular de la patente no explota el producto en su país, ya que se entiende que de esta manera se estaría produciendo una suerte de abuso del derecho y, por tanto se establece una especie de sanción que, reitero, es la producción por parte de terceros del producto farmoquímico.

Entonces, si los países desarrollados cuentan con una norma de este tipo, ¿por qué la Argentina no la va a tener?

No obstante la reserva formulada, que por supuesto quedará registrada en la versión taquigráfica y luego en el Diario de Sesiones, vamos a

votar favorablemente el dictamen del bloque mayoritario porque entendemos que, en este caso, la necesidad de coincidir entre todos los bloques para confirmar la sanción de esta importante ley, que tanto esfuerzo y trabajo nos demandó durante dos años, es superior a otros intereses.

Asimismo, somos conscientes de que esta ley implica la modernización realmente significativa de nuestra legislación en esta materia que, por más de ciento cuarenta años, estuvo regida por la ley 111, sancionada en la época del doctor Mitre, que no otorgaba ningún derecho a los inventores de productos farmoquímicos.

A partir de ahora los titulares de las patentes, es decir, los inventores de los productos medicinales, tendrán un derecho que se verá cristalizado en el canon, *royalty*, o en la remuneración que cobrarán de parte de quienes, a través de una licencia semiautomática, exploten sus productos.

A su vez, creo que estamos defendiendo la salud de los argentinos y poniendo un límite a lo que será el crecimiento de los precios de los productos farmoquímicos.

Además, señor presidente, de alguna manera estamos contemplando la situación de la industria farmacéutica argentina, que gradualmente deberá adecuarse a esta nueva legislación.

Otro argumento para avalar nuestro voto es la reivindicación del Parlamento. No está en mi ánimo confrontar con el Poder Ejecutivo, pero sí demostrar al país que una ley importante, como la que hoy estamos considerando, fue bien trabajada y estudiada y que cada una de sus palabras, puntos y comas fueron varias veces repasados por todos y cada uno de los señores diputados y senadores que tuvieron que votarla.

En síntesis, este gran esfuerzo concluyó con una votación que fue prácticamente por unanimidad en ambas cámaras y ese resultado exitoso es el fruto de una muy importante tarea parlamentaria que tuvo un trámite ejemplar. De tal manera que creo que estamos cumpliendo un acto de servicio con el país.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca; a continuación, el señor senador por Corrientes, del Partido Autonomista y, luego, el señor senador por el Chaco, de la Unión Cívica Radical.

Ruego a los señores senadores que deseen hacer uso de la palabra que se anoten a fin de poder saber cuántos quedan por exponer. Hasta ahora faltan tres senadores.

Sr. Fadel. — Señor presidente: simplemente quiero dejar sentado nuestro voto afirmativo en cuanto a la insistencia en la sanción de la ley, que ya fue fundamentado por el presidente del bloque radical así como también por el miembro informante del bloque de la mayoría.

Considero que esta es una importante reivindicación de este cuerpo y del Congreso en general en cuanto a la labor desarrollada y al profundo estudio que se ha realizado en la materia.

Deseo efectuar también una expresa reserva en cuanto a que nuestro bloque considera que, además de insistirse en los artículos 36, inciso c), 44, 46, 47, 50, 91, 94, 97, 104 y 105, también debería hacérselo en los artículos 42 y 43 del Capítulo VI, explotación de las patentes, referidos a la obligatoriedad de explotar la invención patentada en el territorio de la República Argentina.

Hecha esta reserva, señor presidente, anticipamos nuestro voto afirmativo en cuanto a la insistencia en los artículos que expresamente hemos mencionado.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, del bloque autonomista.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente: han sido abundantes las consideraciones que han hecho aquí los señores senadores preopinantes.

Quiero dejar en claro en este Honorable Senado que el bloque al cual represento, el autonomista, fue el primero en presentar un proyecto sobre patentes, en 1987, cuando ocupaba esta banca el señor senador Feris.

Quando me integré al cuerpo como senador nacional, volví a presentar ese proyecto, y lo reiteraré con posterioridad. Por lo tanto, teniendo en cuenta la preocupación que nuestro partido ha demostrado en este tema, vemos hoy con satisfacción que el bloque de la mayoría, el del radicalismo y el bloque PAIS coinciden también en lo que nosotros hemos adelantado al comienzo de esta sesión, es decir, en la decisión de insistir en la sanción del proyecto que fuera aprobado por este Senado, prácticamente por unanimidad, en oportunidad de su tratamiento.

El Poder Ejecutivo, si bien amparado en una facultad constitucional, ha vetado parcialmente este proyecto sin guardar, en algunos casos, las formas que corresponden, teniendo en cuenta que este tema ha sido debatido durante dos años, en los cuales han concurrido a exponer ante las comisiones respectivas en las que ha estado radicado el proyecto representantes de los sectores interesados e incluso ministros del Poder Ejecutivo.

Teniendo en consideración la importancia de este tema, su trascendencia desde el punto de vista socioeconómico, su influencia en la salud de la población, la defensa de la industria nacional, el rechazo de la intromisión de otros países en nuestras cuestiones internas, la recuperación de las facultades del Congreso Nacional y lo manifestado por el señor senador por Mendoza del bloque radical —que ha sostenido que, de aceptarse el veto tal cual ha sido efectuado, podría influir en el precio de los medicamentos—, quiero dejar claramente establecida nuestra intención de votar por la insistencia en el proyecto aprobado por este Senado.

Por otra parte, considerando el número de los integrantes de esta Cámara, vamos a coincidir —aunque quisiéramos haber ido un poco más lejos— con lo que ha planteado el señor senador por Entre Ríos, miembro informante de la mayoría.

En síntesis, señor presidente, vamos a votar por la insistencia en el proyecto que hemos aprobado en su oportunidad.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco de la bancada radical.

Sr. León. — Señor presidente: esta es una ley importantísima para el país y este Parlamento la custodió como una manera de defender una estrategia nacional.

Estoy totalmente de acuerdo y feliz por esta coincidencia de todos los senadores, ya que ello muestra que en el tratamiento de este tema, por encima de cualquier otra actitud, ha existido un criterio patriótico.

Como dije, estoy de acuerdo en todo lo que aquí se ha dicho. Simplemente quiero señalar que sería saludable que algunos factores que se sintieron molestos por la sanción de esta ley comprendan que la Argentina tiene valores culturales que deben ser respetados y una dignidad que también debemos cuidar.

Un candidato a presidente de los Estados Unidos calificó a esta ley como un acto de piratería. El ministro de Comercio de ese país dijo que nunca más vendría aquí un peso y que nos parecíamos a Burundi y Surinam. Yo respeto mucho a Burundi y a Surinam. Este último es un país de América latina que acaba de conseguir su emancipación hace unos años y que sufre la marginación y la pobreza de un ordenamiento internacional que, precisamente, a veces surge de la injusticia de la pretensión de la acumulación.

El presidente de nuestra Nación estuvo muy bien cuando dijo que era un presión intolerable,

aunque no me gustó su actitud cuando a los dos días de vetar la ley fue a comer a la Cámara de Comercio Norteamericana.

El presidente tiene todo el derecho de ir a comer con inversionistas extranjeros, pero la política exige "formas" y en algunas circunstancias pareciera que esto enfrenta criterios que tal vez a nosotros no nos conmuevan porque creemos en la dignidad de todos los poderes, pero que a otros sectores del país o del exterior pueden conmover en función de lo que puede aparecer como una declinación de algún marco de las libertades y de la independencia con que debemos manejarnos los argentinos.

El propio presidente dijo que estaría mal si el embajador argentino en Estados Unidos protesta porque no nos han comprado el avión Pampa o porque han presionado sobre el Cóndor.

Lo único que me mueve a hacer esta brevísima acotación respecto de esta insistencia que estamos votando es que, por más importantes que sean los países, tienen que aceptar que deben respetar al Parlamento argentino, así como las estrategias que el debate de todos los argentinos descubra como el camino mejor.

Esta sanción, esta síntesis o, en alguna medida, este acuerdo, muestra que aquí no ha habido piratería. Podemos ser Burundi o Surinam, que son pueblos hermanos de la comunidad internacional, pero somos una Nación que está convencida de que debemos manejarnos con los grados culturales de dignidad e independencia que siempre ha tenido el pueblo argentino.

Espero que el señor embajador de los Estados Unidos o el ministro de Comercio, a quienes, por supuesto, tenemos que respetar porque representan a una gran Nación, tengan la prudencia necesaria para advertir que nuestra legislación también tiene como criterio la custodia de nuestro pueblo y no exclusivamente los intereses de lo que se les ocurra a los extranjeros, por más importante y fuerte que sea la extranjería.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: me siento totalmente interpretado por las expresiones del presidente del bloque radical, señor senador Genoud, así como también por muchas de las palabras pronunciadas por los distintos senadores que han hablado.

Me gustaría poder explayarme sobre el tema en consideración dado que creo que la insistencia en la ley oportunamente aprobada permitirá al país tener una buena ley, reconociendo la

propiedad intelectual de las patentes y ajustándonos en un todo al Tratado de Marrakech con el cual culminó la ronda Uruguay de la discusión del GATT. Aprovecho para recordar que ni bien se firmó dicho tratado, a través de un proyecto de ley que fue tenido en cuenta junto con un mensaje posterior del Poder Ejecutivo, solicité que se lo aprobara.

Dado que no quiero hacer peligrar el quórum y teniendo en cuenta que ha habido un compromiso, según me han informado, para ser breves y poder tener una sesión provechosa y considerar otros temas, solicito se inserte en el Diario de Sesiones un estudio que realicé oportunamente observando el veto del Poder Ejecutivo. Se trata de un análisis de la ley enmarcado en las normas del Tratado de Marrakech.

—Se llama para votar.

Sr. Presidente (Menem). — Estamos determinando cómo va a ser la votación, a los efectos de que pueda ser hecha de una sola vez ya que de acuerdo con los términos de la Constitución Nacional, según la última reforma, en estos casos debe ser en forma nominal. Pero como hay una sola propuesta, es decir, confirmar algunos artículos y aceptar las observaciones en otros, el sistema de votación va a ser el siguiente: el voto afirmativo significará que se acepta la confirmación de algunos artículos y el veto del Poder Ejecutivo en los casos indicados por los señores senadores que han hecho uso de la palabra. El voto negativo implicará que se rechazan totalmente las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.

A los efectos de que los señores senadores tengan más presentes los términos de la votación, por Secretaría se va a dar lectura a los artículos que se confirman y a aquellos que contienen observaciones que son aceptadas.

La Presidencia sugiere la presencia del miembro informante de la mayoría.

—Ingresa en el recinto y ocupa su banca el señor senador Alasino.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura a los artículos que se propone confirmar y a aquellos sobre los que se sugiere aceptar las modificaciones.

Sr. Secretario (Piuze). — Se propone confirmar los siguientes artículos: 36; inciso c); 44; 46; 47; 50; 91; 94; 97; 104 y 105.

Sr. Alasino. — Señor presidente: sugiero que se realice al revés. Propongo la metodología de que nosotros leamos nuevamente los artículos y usted tome nota, para ver si son los mismos.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a seguir la metodología que he indicado. Hemos tomado nota de los artículos que ustedes han señalado.

Sr. Alasino. — Pero Secretaría ha empleado un orden numérico y nosotros tenemos un orden por temas. Como se leyó rápidamente, quizá no pudimos controlar.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene que ser por orden numérico. Se vuelve a leer por Secretaría.

—Se leen nuevamente los artículos que se propone confirmar.

Sr. Alasino. — Correcto.

Sr. Bordón. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bordón. — Entiendo que cuando se menciona el artículo 50 se está haciendo referencia al primer párrafo. ¿Es así, señor presidente?

Sr. Presidente (Menem). — Cuando se habla de los artículos que se confirman se hace referencia concreta a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.

Sr. Bordón. — Correcto. Quería hacer la aclaración para que quedara puntualizado.

Sr. Presidente (Menem). — En todos los casos, cuando se habla de confirmaciones o de aceptaciones, se lo hace en los términos en que está concebido el decreto, porque en más de un caso se trata de observaciones parciales en las que se individualizan párrafos o incisos.

Sr. Bordón. — Coincido. Simplemente, me parecía importante que quedara asentado en el Diario de Sesiones.

Sr. Genoud. — Simplemente quería que se consignara el término que usted acaba de pronunciar: "confirmar", que es el que corresponde.

Sr. Presidente (Menem). — Así lo hice en todo momento.

Sr. Genoud. — Y no "insistir", para evitar equívocos.

Sr. Presidente (Menem). — Se confirma.

Ahora por Secretaría Parlamentaria se dará lectura a aquellos artículos, disposiciones o normas que contienen observaciones del Poder Ejecutivo que son aceptadas.

Sr. Secretario (Piuze). — Artículo 7º, inciso c); artículo 37; artículo 42; artículo 43; artículo 65. incisos d), f), g) y h); y artículo 102.

Sr. Alasino. — Sí.

Sr. Presidente (Menem). — La moción que voy a someter a votación implica la confirmación de los artículos mencionados en primer término y la aceptación de las observaciones en el segundo caso, en todos los casos de acuerdo con los términos de la ley 24.481 y del decreto 548, que es donde se consignaron las observaciones.

La votación será nominal.

— Se practica la votación nominal.

— Votan por la afirmativa los señores senadores Alasino, Bittel, Bordón, Branda, Britos, Cafiero, Cendoya, de la Rúa, Fadel y Figueroa.

— Al expresar su voto, dice el

Sr. Genoud. — Voto por la afirmativa, solicitando que se ponga especial atención en las reservas que hicimos con relación a los artículos 42 y 43, sin que ello implique ninguna modificación en el sentido de nuestro voto.

Sr. Presidente (Menem). — Así se hará, señor senador.

— Continúa la votación.

— Votan por la afirmativa los señores senadores Lafferrière, León, Ludueña, Mac Karthy, Maranguello, Martínez, Massat, Mazzucco, Molina, Oyarzún, Peña de López, Rivas, Romero, Romero Feris, Rubeo, San Millán, Sapag, Snopek, Solari Yrigoyen, Storani y Vaca.

Sr. Presidente (Menem). — Voto por la afirmativa.

Sr. Bordón. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bordón. — Señor presidente: simplemente quería expresarme en el mismo sentido que mi colega por la provincia de Mendoza.

Sin que esto cambie nuestro voto, reitero las reservas que hicimos en referencia a los artículos 42 y 43.

Sr. Presidente (Menem). — Ha sido aprobada la moción en los términos indicados por unanimidad de los treinta y tres señores senadores presentes en el recinto, con lo cual — a los efectos de la confirmación — se da cumplimiento al extremo previsto por la Constitución en el sentido de que tiene que ser aprobada por mayoría calificada de dos tercios de los miembros del cuerpo.

Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: en relación al tema que acabamos de votar, yo había pedido una inserción.

Sr. Presidente (Menem). — Sí; así es, señor senador.

Se va a votar la inserción solicitada por el señor senador por el Chubut con respecto al tema que acabamos de aprobar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se procederá en consecuencia.¹

8

BENEPLACITO POR UN PREMIO AL ESCRITOR MARIO VARGAS LLOSA

Sr. Presidente (Menem). — Pasamos a considerar los órdenes del día previstos para hoy.

Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración del señor senador Alasino por el que se expresa beneplácito ante el otorgamiento del premio "Miguel de Cervantes" al escritor peruano Mario Vargas Llosa. (Orden del Día N° 83.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Alasino, expresando beneplácito ante el otorgamiento del premio "Miguel de Cervantes" al escritor peruano Mario Vargas Llosa; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con el artículo 119 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 6 de marzo de 1995.

*Julio A. Miranda. — Olijela del Valle
Rivas. — Ricardo E. Lafferrière. — Fernando V. Cabana.*

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito ante el otorgamiento del premio "Miguel de Cervantes" al escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Augusto Alasino.

¹ Ver el Apéndice.

Solicitada por el señor senador Solari Yrigoyen

Declaración del senador Hipólito Solari Yrigoyen sobre el veto a la ley de patentes

El presidente Carlos Menem ha procedido a vetar la ley de patentes en virtud de un compromiso secreto al que había llegado con los Estados Unidos para que la ley de patentes de la Argentina se ajustase a los intereses de ese país.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento se ajustaba a dicho compromiso. En cambio la ley aprobada ha armonizado los intereses en juego reconociendo la protección a la propiedad intelectual y ajustándose a los plazos fijados en el Acuerdo del GATT que culminaron con la Ronda Uruguay, conocido como Acuerdo de Marrakech.

El presidente se identificó con la posición de los Estados Unidos cuando, coincidiendo con el número de las impugnaciones de este país, dijo que "hay por lo menos diez aspectos en los que se plantean diferencias con la legislación internacional". La Unión Europea plantea sólo seis objeciones.

El doctor Carlos Menem volvió sobre el tema en declaraciones radiales al señalar que el Parlamento "lo más rápido posible" debe elaborar un nuevo proyecto de ley evitando supuestas contradicciones entre el Acuerdo del GATT y la ley aprobada por el Congreso.

Lo que no ha dicho el señor presidente es que la Argentina no tiene obligación inmediata de ajustarse a las normas reglamentarias de la protección de la propiedad intelectual del Acuerdo del GATT porque este mismo tratado le otorga plazo para la aplicación de las mismas hasta el 1° de enero del año 2005.

El plazo mencionado surge del Acuerdo de Marrakech, cuyo anexo 1C legisla "sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio", conocido con la sigla inglesa de TRIPS.

En la parte VI de ese anexo titulado Disposiciones Transitorias, en los párrafos 1 y 2 del artículo 65, se otorga un plazo de 5 años para que los países en desarrollo apliquen sus disposiciones. En el párrafo 4 del mismo artículo se otorgan cinco años más a los países, como la Argentina, que no protegían la propiedad intelectual mediante patentes a la fecha de la aplicación del acuerdo que comenzó el 1° de enero de 1995.

Es cierto que el plazo del año 2005 reconoce una excepción que es la obligación inmediata que tienen los países miembros del Acuerdo de establecer un procedimiento para que puedan presentarse solicitudes de pa-

tentes para los productos farmacéuticos, según el artículo 70.8.a). La ley argentina se ha ajustado a ese requerimiento en su artículo 105.

También se ha ajustado la ley argentina a otras dos obligaciones fijadas por el TRIPS, a saber:

1) Conceder a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que se otorgue a los propios nacionales con respecto a la propiedad intelectual (artículo 3° del TRIPS).

2) Otorgar el trato de la nación más favorecida a todos los miembros (artículo 4° del TRIPS).

La ley argentina ha reducido, incluso, el plazo de diez años a ocho años para empezar a patentar (artículo 104 de la ley).

También nuestra ley establece en su artículo 106 una protección retroactiva de 2 años ("Pipeline") cuando el acuerdo no reconoce protección retroactiva ya que el artículo 70.1 expresa que "no genera obligaciones retroactivas a actos realizados" antes del 1° de enero de 1995. O sea, que la ley argentina reconoce como materia patentable los productos farmacéuticos presentados para su patentamiento en el exterior desde el 1° de enero de 1993 siempre y cuando estos productos no hayan iniciado su explotación comercial.

No es exacto que los Estados Unidos nos puedan aplicar las sanciones previstas en su Ley de Comercio (capítulo especial 301) ya que conforme a esa misma ley no se pueden aplicar sanciones a un país que forma parte de un tratado multilateral como es el de Marrakech.

Si Estados Unidos quiere abrir una investigación a causa de la ley de patentes argentina debe recurrir al órgano de solución de diferencias del GATT y si pretendiera imponernos sanciones porque nuestro Congreso no legisla a su gusto, correspondería que fuera nuestro gobierno el que plantease el caso en el órgano previsto por el GATT para las controversias entre sus miembros.

Rechazo con energía la actitud del Poder Ejecutivo de vetar la ley y señalo que este veto encubierto ha sido un paso más dentro del acuerdo celebrado con los Estados Unidos. Debemos defender nuestros propios intereses, conforme a los tratados internacionales que hemos suscripto. Y debo recordar que fui el autor del proyecto que culminó con la aprobación del Tratado de Marrakech. En consecuencia, nuestra obligación es rechazar el veto e insistir en la aprobación de la ley.

Hipólito Solari Yrigoyen.

Buenos Aires, 11 de abril de 1995.